

SENTENCIA del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Málaga

EXTRACTO de la Sentencia dictada sobre el recurso contencioso administrativo nº 429/2000 por el Ilmo. Sr. D. RAFAEL RUIZ ÁLVAREZ, Magistrado-Juez del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Málaga

ANTECEDENTES DE HECHO

Trece profesores del IES Huelín, de Málaga, presentan recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta del recurso de alzada de fecha 29 de junio de 2000 interpuesto ante la resolución de la Directora del mismo IES requiriendo a cinco profesores para que entregaran copia de los exámenes de la alumna D^a María Dolores Trujillo Aguilera, cuyo padre formuló solicitud en tal sentido hasta en tres ocasiones, para poder colaborar con los profesores en la formación de su citada hija, cuyo esfuerzo entendía no se correspondía con los resultados de las evaluaciones.

Los recurrentes solicitan la anulación de la resolución de la Directora, manifestando que no procede la entrega de copia de los exámenes de la alumna de 2º curso de Bachillerato, D^a María Dolores Trujillo Aguilera, conforme a lo dispuesto en las Órdenes de 28 de agosto de 1995 y 9 de septiembre de 1997, que exclusivamente contemplan un procedimiento de revisión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los artículos 105.b C.E., 35.a) y 37 LRJPAC, ofrecen base y apoyo suficiente para declarar que la Dirección del Centro actuó en el presente caso en estricta observancia de la legalidad aplicable, al requerir a los profesores las evaluaciones, como, por otra parte, puso de manifiesto el documentado informe de la Inspección de Educación, de fecha 5 de junio de 2000, emitido precisamente a petición de dichos profesores. Los preceptos legales citados autorizan el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, cuando ostentan la condición de interesados del procedimiento según la Ley, lo que les permite obtener copias de los documentos contenidos en el expediente, cualquiera que sea la forma de expresión. En el caso suscitado es claro que el padre de la alumna tiene acreditado un interés legítimo y directo, según el artículo 31 de la misma Ley, y no concurren absolutamente ninguno de los supuestos previstos en el número 4 del artículo 37 citado para denegar tal derecho, es decir, no prevalecen razones de interés público, no existen intereses de terceros más dignos de protección, ni Ley que disponga lo contrario (obsérvese que el precepto se refiere a norma legal). Se cumplen sobradamente, por otra parte, las exigencias del número 7 del repetido artículo 37, en cuanto se trata de una petición individualizada de documentos. No se está, pues, en presencia de una petición injustificadamente genérica u opaca.

En consecuencia, no hay razones de ningún tipo para impedir que el padre o madre de una alumna conozca los resultados de su formación, pues téngase en cuenta que a los mismos les corresponde en primer lugar la educación y formación integral de sus hijos no emancipados, y ello con el carácter de deber inherente a la patria potestad, como ordena el artículo 154 del Código Civil.

El Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su Sentencia de 14 de noviembre de 2000, se ha ocupado del derecho de acceso a los registros y archivos, en

relación con el principio de transparencia, y ha proclamado que "El derecho de acceso a los registros y documentos administrativos constituye un derecho de los ciudadanos de los llamados de tercera generación. Está enraizado en el principio de transparencia administrativa, el cual corresponde a una nueva estructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, este derecho está reconocido por la CE en el art. 105 b), con arreglo al cual la ley lo regulará... Aún cuando este precepto pudiera pensarse que condiciona la aplicación de este derecho a su desarrollo legislativo, el Tribunal Constitucional, considerando su valor sustantivo, ha estimado, en aplicación del principio de la fuerza normativa directa de la CE, que dicho precepto es aplicable directamente sin necesidad de espera a su desarrollo legislativo, que se ha llevado a cabo, básicamente en el artículo 37 LRJAP. En efecto el TC ha declarado que la reserva de Ley que efectúa el art. 105 CE no tiene el significado de diferir la aplicación de los derechos fundamentales y libertades públicas hasta el momento en que se dicte una ley posterior a la CE, ya que en todo caso sus principios son de aplicación inmediata. Resulta, pues, evidente, que en aplicación directa de la norma constitucional, este derecho exige, con el fin de respetar su núcleo esencial integrado por el haz de facultades que lo hacen reconocible y la efectividad de los intereses del administrado a que responde, que se haga en un grado razonable asequible a los particulares, superando las limitaciones derivadas de su posición de inferioridad material frente a los poderes públicos, el adquirir conocimiento de los datos y documentos que puedan legítimamente interesarle, sin otras limitaciones que las que el propio precepto constitucional contempla -en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas- y las derivadas de las normas generales de procedimiento y de los principios de proporcionalidad, racionalidad y buena fe a que debe sujetarse el ejercicio de todo derecho".

Una concreta petición - como la del padre solicitante de los exámenes de su hija, en nuestro caso- debe permitir a la Administración informar sobre el estado de los expedientes en tramitación que puedan afectar a quien se interesa por ellos, salvo que lo impida el deber de secreto o de confidencialidad. Este derecho está recogido en el ya aludido artículo 35 LRJPAC -en estrecha relación con el principio constitucional que inspira la regulación del art. 105 b) CE- y dispone que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones públicas, tienen, entre otros derechos, **el derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos** (vid. Sentencia de 14 de noviembre de 2000, antes cit.)

Por todo lo expuesto, y considerando que los profesores recurrentes no han acreditado interés legítimo, ni ventaja o beneficio alguno en su esfera jurídica por la anulación del acto, debemos declarar inadmisibles el presente recurso contencioso-administrativo.

Se aprecian méritos suficientes para condenar en costas a los recurrentes, por cuanto incurren en notoria temeridad, al sostener un recurso tanto en vía administrativa como jurisdiccional, cuando les consta previamente con todo detalle el Derecho aplicable, por el informe emitido a su instancia por el Inspector de Educación, con el Vº Bº del Jefe del Servicio, cuyas directrices e instrucciones deben observar en el ámbito específico de sus funciones; de conformidad con el citado criterio de imposición, contenido en el artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación

FALLO:

Que debo declarar y declaro la inadmisibilidad del presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por D^a MARÍA VICTORIA PAREJA CAMPOS y otros doce profesores del IES Huelín, de Málaga, contra las resoluciones de la Directora de dicho IES, y contra la desestimación presunta del recurso de alzada frente a las mismas por la Delegación Provincial de Educación, JUNTA DE ANDALUCÍA, con expresa condena en costas a los recurrentes.